



RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN  
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
EXPEDIENTE: RO/68/14.

Hermosillo Sonora, a dieciséis de julio de dos mil quince.-----

--- VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número RO/68/14, e instruido en contra de los CC.

en su carácter de Residente y/o Supervisor de Obra;

en su carácter de Coordinador de Supervisión; y **JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO**, en su carácter de Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana, todas adscritos a la Comisión Estatal del Agua; por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, I, III, V, VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y.-----

----- **RESULTANDOS** -----

1. Que el día dos de abril de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado con el C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo.-----

2. Que mediante auto dictado el veintidos de dos mil catorce (fojas 179-180), se radicó el presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme a derecho correspondiente; asimismo se ordenó citar a los CC.

y **JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO**, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.-----

3. Que con fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce (fojas 189-192, 193-198 y 200-205) se emplazó formal y legalmente a los encausados, para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.-----

4. Que siendo las nueve y diez horas del día nueve de septiembre de dos mil catorce, se levantaron actas de audiencia (fojas 206-207 y 427-428) en las que se hizo constar la comparecencia de los  
quienes a través de su representante

CC

legal, el Licenciado Jorge Eduardo González Madrid, mediante escritos dieron contestación a las imputaciones en su contra ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 215-258 y 436-479) asimismo en la misma fecha a las once horas con quince minutos, se hizo constar e incomparecencia del C. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO por lo que se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra (foja 480). Posteriormente, mediante auto de fecha seis de julio de dos mil quince, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia bajo los siguientes:

-----CONSIDERANDOS-----

I.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es y ha sido competente para conocer y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 143 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 2.ª fracción y 62, 63, 64 fracción, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción I del Reglamento Interior de esta Dependencia. ....

II.- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, <sup>señalados</sup> como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos a quienes se les <sup>de</sup> atribuyen los hechos materia del presente procedimiento fueron debidamente acreditados el <sup>de</sup> propio al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quien denunció ejercitando a facultad otorgada por los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2, 66 y 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; las cláusulas primera, cuarta, fracciones I y II, quinta, fracción II, y décima cuarta, todas del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, artículo 15 Bis, fracciones I, IX, XI, XII, XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; calidad que quedó debidamente acreditada con copia certificada de nombramiento como Director General, asimismo a la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, suscrita por el Gobernador del Estado y reafirmado por el Secretario de Gobierno, con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 19). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados, quedó debidamente acreditada con copias certificadas de nombramientos de fecha uno de abril de dos mil once, en donde el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua designa al C. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO como Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de esa Entidad (foja 22); en fecha tres de mayo de dos mil doce, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, otorgó el nombramiento de Coordinador de Supervisión de la ciudadía Entidad al C. (foja 23); el día tres de mayo de dos mil doce el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal

del Agua, otorgó al C. el nombramiento de Supervisor de Obra de esa Entidad (foja 24); a las documentales descritas con anterioridad se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción II del Código Procesal Civil Sonorense aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

III.- Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, que con motivo del ejercicio de sus funciones que como servidores públicos desplegaron, así como su derecho a objetarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por si o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 178 del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se los cobijó traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase.

IV - El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las admitidas mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil catorce (fojas 481-485), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran.

V.- Por otra parte, en las audiencias de ley celebradas a las nueve y diez horas del día nueve de septiembre de dos mil catorce, a cargo de los CC.

ambos a través de su representante legal, dieron contestación a las imputaciones mediante escritos (fojas 215-258 y 486-479), en donde manifestaron las defensas que consideraron oportunas expresar, así como el ofrecimiento de las pruebas que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos que se les imputan. En esa misma fecha se levantó constancia de la incomparecencia del C. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO por lo que se le tuvieron como presuntamente ciertos los hechos que el denunciante le imputa (foja 480).

VI.- Ahora bien, esta autoridad con fundamento en el artículo 340 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual a la letra dice: "...En la redacción de sentencias se observarán las siguientes reglas: ... II.- Se decidirá previamente a la cuestión de fondo, las excepciones dilatorias que no fueren de previo y especial pronunciamiento, y en caso de que alguna se declare procedente, el juez se abstendrá de fallar la cuestión principal, reservando el derecho al actor..." resultando lo siguiente:

- - - Se advierte que los CC.

en sus

Audiencias de Ley, ambas de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce (fojas 206-207 y 427-428) mediante escritos de contestación presentados por su representante legal, opusieron como defensa entre otras, la "NO SUJECIÓN A PROCEDIMIENTO POR INDEBIDA RADICACIÓN" (fojas 215 y 436); y manifestaron en su defensa al responder los hechos que se les imputan en la denuncia entre otras cosas lo siguiente "... para que la Contraloría en el caso que me ocupa, pueda imponerse en su caso una sanción administrativa, deberá iniciar un procedimiento dictando un auto de radicación del mismo por la presunta responsabilidad, y adicionalmente que debía hacerse saber, entre otras, la o las responsabilidades que se me imputan. En el auto de radicación que me fue notificado vía cédula de notificación y que aparece fechado el día 22 de abril de 2014, no se establece que la autoridad instructora me esté imputando una o más responsabilidades que motiven la sujeción al procedimiento que radicó, es decir, la autoridad instructora no me está haciendo saber (sic) de mis presuntas fallas administrativas como lo prevé la legislación previamente invocada, sino que únicamente se remite a mencionar que el C. Ing. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, Tular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General interpuso una denuncia en contra del suscrito por los hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen como presuntamente constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás legislación que se invoca en el mismo, y con el que se le correrá traslado a los encausados al momento de su emplazamiento, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 fracción II de la mencionada Ley de Responsabilidades, respecto de hacerle saber la responsabilidad que se le imputa".

- - - Al respecto, esta autoridad determina que del análisis de las constancias que conforman el sumario, se advierte que al incurrirse el procedimiento, en su primera actuación que es el auto de radicación, carece de un requisito fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 74, segundo párrafo que a la letra dice: "ARTÍCULO 74.... nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..."; así como en el artículo 76 en su fracción segunda, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a la letra dice "ARTÍCULO 76.- ...I.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a comparecer, a contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un defensor. ... defensa que se hizo valer por los encausados en su escrito de contestación, manifestando que esta resolutoria no estableció imputación alguna que motive la sujeción al presente procedimiento, además que no se

les hizo saber en el auto de radicación las faltas en que incurrieron y que únicamente se limita a informar que se interpuso una denuncia en su contra. Es así, que esta autoridad no puede, atendiendo al principio de imparcialidad y entendiendo la justa dimensión del problema jurídico cuya solución se pide pasar por alto tal circunstancia, ya que deben respetarse las citadas formalidades esenciales consagradas en los precejos legales mencionados anteriormente y que conforman el debido proceso, atendiendo siempre las probanzas ofrecidas por la parte denunciante, así como a las defensas y excepciones interpuestas por los encausados.

... Lo anterior es así, por virtud de que en el auto de radicación de veintidós de abril de dos mil novecientos ochenta y ocho (179-180), únicamente se estableció: "...el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de información e integración de la Contraloría General del Estado de Sonora, interpone formal denuncia en contra de los CC. en su carácter de Supervisor de Obra en funciones de Responsable de Obra de la Comisión Estatal del Agua, en su carácter de Coordinador de Supervisión de la Comisión Estatal del Agua y **JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO** en su carácter de Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la Comisión Estatal del Agua, por los hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen presuntamente constitutivos de infracciones administrativas violatorias del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás legislación que se invoca en el mismo y con el que se comete traslado a los encausados al momento de su emplazamiento... Por lo anterior, se ordena radicar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por los hechos que hace referencia el denunciante en el escrito y anexos que se atienden...". Tal y como se advierte del párrafo transcrito que corresponde al contenido del auto de radicación, es evidente que se incumple con lo establecido por el artículo 78, fracción II reproducido con anterioridad, ya que sólo se remite a la denuncia, sin establecer y explicar a los acusados, con certeza, la imputación de la que son objeto, dejando en incertidumbre a los servidores públicos encausados, ya que no se les da la posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses.

... Sirve de apoyo para la anterior consideración por analogía, la Tesis Aislada que a continuación se transcribe:

Época: Novena Época  
 Registro: 163741  
 Jurisdicción: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Tipo de Tesis: Aislada  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 Tercer Tomo XXXII Septiembre de 2019  
 Materiales: Administrativo  
 Tesis: X/19/A.T.54 A  
 Páginas: 1402

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL AUTO CON EL QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONTENER, ADEMÁS DE LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN A AQUELLOS Y LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDAN, LA CAUSA QUE SE LES ATRIBUYE.** De conformidad con la fracción I del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el auto con el que inicia el procedimiento para establecer la responsabilidad de sus miembros debe ser notificado al servidor público denunciado haciéndole saber con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se fundan, además, a fin de respetar su garantía de audiencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese provido debe contener la causa de responsabilidad que

se le atribuye, pues trasladados los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la prerrogativa subjetiva de defensa del imputado no sólo comprende la posibilidad de debatir los hechos, materia del procedimiento que se le instruye, sino también la de controvertir la legalidad de la imputada causa. Máximo que acorde con el artículo 156 de la Citeda Ley, la sanción que en su caso se le imponga a imputar depende de la causa que se estime comprobada.

--- Bajo esa tesis, es de concluir que le asiste la razón jurídica a los CC.

toda vez que del contenido del auto de radicación en comento, se observa del mismo que efectivamente no contiene la causa de responsabilidad que se le atribuye a los servidores públicos; circunstancia que no pasa desapercibida, aunado a que los encausados, además de debatir los hechos que se le imputan, pueden controvertir la legalidad de la causa, tal y como lo hicieron valer.

--- Si bien es cierto que, mediante constancia de fecha nueve de septiembre de dos mil setecientos, se advierte la incomparecencia del C. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO y por consecuencia se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra, también opera a su favor la excepción interpuesta por los C.C.

beneficiándolo, en virtud de que dicha excepción surte efectos para todos por igual, por estar en el mismo supuesto que los acusados que invocaron tal defensa, ya que al no establecer y explicar a los encausados con certeza la imputación de la que son objeto, dejándolos en incertidumbre, ya que no se les da la posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses, situación que se desarrolla con anterioridad.

--- Por consiguiente, esta autoridad determina que sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos imputados a los encausados y en base a las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilidad para acreditar la responsabilidad administrativa que la denunciante le atribuye a los CC.

y JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO por lo tanto

no es factible sancionarlos administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias que presente sumario y del razonamiento anteriormente efectuado, se advierte con certeza la violación planteada.

--- En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que entró en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. E. ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS

**MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.** Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la imparción de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendientes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previas respectivamente en los artículos 8. numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgado se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen al derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda cesación en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 Constitucional estableció como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la imparción de justicia. -----

Época: Décima Época

Registro: 2005056

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II

Materia(s): Común

Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a)

Página: 933

**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS**

**DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO.** Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar nuevos juicios y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albaladejo Cornejo y otros vs. Ecuador, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, de modo que les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no se usen: medidas públicas aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos (caso Aliramaez Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Casados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2005. Serie C, No. 168) Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuerza jerárquica, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido tratado así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona a su discreción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues sostener lo contrario gravemente el incumplimiento de la primera obligación; impuesta por el orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.

... En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis que a continuación se transcribe: .....

Época: Décima Época  
Registro: 2006590  
Instancia: Pleno



Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P/J/43/2014 (10a.)  
Página: 41



**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MaticES O MODULACIONES.** El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia, el cual se confiere de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienen a espasarificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1º constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, someter el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocerse en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

... Por virtud de lo antes manifestado, se concluye que no es dable sancionar en este caso a los CC.

**Y JESÚS ROBERTO MOLINA**  
**ACEDO**, por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**, motivo por el que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada varían el resultado de la presente resolución, ya que de análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia Sirve de apoyo para la anterior consideración la jurisprudencia que a continuación se transcribe. -----

Época: Octava Época  
Registro: 220006  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Marzo de 1992  
Materia(s): Común  
Tesis: J/30/95  
Página: 89

**CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.** Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.

... En otro contexto, se advierte que los CC,

hacen uso del derecho que tienen de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por tal motivo se ordena se publique la presente con la supresión de los mismos únicamente por lo que a

ambos respecta; en el caso del C. **JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO**, no hace uso de derecho que tiene de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por tal motivo se ordena se publique la presente sin la supresión de los mismos; lo anterior con fundamento en lo establecido en el numeral 13 de la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. . . .

**VII.-** Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII de artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en relación con el numeral 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: . . . .

-----  
**RESOLUTIVOS**  
-----

**PRIMERO.-** Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo I de esta resolución. . . .

**SEGUNDO.-** Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente resolución, se reconoce la **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** a favor de los **CC.**

**ACEDO** . . . . . **DIRECCIÓN**  
de Res. . . . .  
y Situación . . . . .

**TERCERO.-** Notifíquese personalmente esta resolución a los **CC**  
en el domicilio señalado en autos, el ubicado

asimismo notifíquese al **C. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO**, mediante a publicación en Tabla de Avisos de esta Dirección General, comisionándose para tal diligencia al C. LIC. **MANUEL EFRAÍN TIRADO ROBLES** y/o **JOEL SAAVEDRA PACHECO** y/o **MANUEL ELIAS MERCADO ALVARADO** y/o **RENÁN RENÉ PERALTA JAVALERA** y como testigos de asistencia a las C. LIC. **VANESA GÁLVEZ PAZ** y C. **LILIANA CASTILLO RAMOS** todos servidores públicos de esta Dependencia y por oficio al Denunciante. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección General, comisionándose en los mismos términos a la C. LIC. **VANESA GÁLVEZ PAZ** y como testigos de asistencia a los C. **J.C. DANIEL ALEJANDRO PALAFORA VILLEGAS** y **ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ**. . . . .

**CUARTO.-** En su oportunidad, previa ejecutoria de la presente resolución archívese e expediente como asunto total y definitivamente concluido. . . . .

-----  
Así lo resolví y firma la C. Lic. **María Esther Bazúa Ramírez**, Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número **RO/68/14** instruido en contra

de los CC.

y JESÚS ROBERTO MOLINA

ACEDO, ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. ....

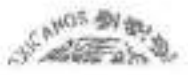
..... DAMOS FE.



LIC. MARIA ESTHER RAMÍREZ  
Directora General de Responsabilidades Patrimonial  
de la Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría  
General

LIC. ALONSO CALDERÓN ITURRALDE DE RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES  
LISTA con fecha 06 de agosto de 2015, se publicó en lista de responsabilidades patrimoniales que antecede. .... CONSTE.



Contraloría  
General  
de Responsabilidades  
Patrimoniales



Contraloría General  
de Responsabilidades  
Patrimoniales



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CALLE DE MEXICO 1000  
06702 MEXICO, D.F.



Secretaría de la Contratación  
General  
DIRECCION GENERAL  
de Responsabilidades  
y Situación Patrimonial

2017